

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DE MANERA URGENTE REALICE UN CAMBIO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD POR LA CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS, ASÍ COMO, A DESTINAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A FIN DE REFORZAR EL COMBATE A LA INSEGURIDAD, PARTICULARMENTE PARA LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD JÚAREZ Y URIQUE POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, A CARGO DE LA DIPUTADA DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

La suscrita, Diputada Federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha convertido en tierra de nadie, donde las extorciones, homicidios y ejecuciones a plena luz del día es lo que vivimos los miles de habitantes de esta localidad fronteriza.

Los hechos recientes que todos conocemos sobre la ejecución de varias personas a plena luz del día en un restaurante en Plaza Galería Tec, el día 16 de junio del

presente año, puso en riesgo vidas inocentes dejando en nuestra ciudad conmoción y miedo al asistir a lugares públicos, sin embargo, no son los únicos casos, en el centro de la ciudad han sucedido asesinatos como estos, extorciones a comercios, a líneas de transporte, extorciones telefónicas a empresarios, incendios provocados por el pago del llamado derecho de piso, secuestros, pago por derecho de protección, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, enfrentamientos entre grupos armados en diversos puntos de nuestra ciudad, mismos que han incrementado en los dos últimos meses.

El lunes 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua fueron asesinadas tres personas al interior de una iglesia, hechos que ya fueron condenados por la Gobernadora de nuestra entidad y que de manera eficaz y eficiente, se ha avanzado en la investigación para esclarecer los hechos y detener a los responsables de tan lamentable suceso.

A plena luz del día el crimen organizado ha tomado nuestras calles y nuestra tranquilidad, ráfagas de disparos a todas horas existiendo víctimas colaterales, mientras seguimos viendo a un gobierno indolente y que no reconoce que estamos ante un Estado fallido, en donde diversas regiones de nuestro país enfrentan condiciones de violencia, exclusión y olvido por parte de las autoridades responsables.

Un Estado acusado de complicidad porque pide abrazos no balazos, porque incita a respetar a los delincuentes, mientras la población sufre por la inanición del Gobierno Federal. Con burla y circo, día a día se hace un espacio televisivo que



solo busca reflectores, con lo que ha permitido que se “institucionalice la inseguridad”, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país.

Uno de los problemas más graves que padecemos en todo el país es, la incapacidad del gobierno para proveer a sus habitantes de seguridad, creando ciudadanías que no gozan de los derechos mínimos.

México ha vivido de 2018 al 2022 los años más violentos en su historia reciente, Ciudad Juárez sigue ocupando los primeros lugares en las más peligrosas no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Tan solo en 2020, Chihuahua ocupaba el segundo lugar con 3,467 homicidios intencionales, la gran mayoría atribuidos al crimen organizado. Los números solo dimensionan la magnitud y frecuencia con que se cometen estos crímenes, sin embargo, se habla de subregistros que determinan más del doble de lo reportado, ocultando las cifras alarmantes de esta complicidad entre autoridades y el crimen organizado.

De acuerdo con el INEGI, del Comunicado de Prensa 398/21¹, detallan que “Las estadísticas revelan que en 2020 se registraron 36 579 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2019”, además señalan que “Las estadísticas revelan que de enero a junio de 2021 se registraron 16,972 homicidios en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional”

¹ Inegi (2021, julio 27) DATOS PRELIMINARES REVELAN QUE EN 2020 SE REGISTRARON 36 579 HOMICIDIOS. Comunicado de Prensa Recuperado de [398/21.https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodem.o/Defcioneshomicidio2020.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodem.o/Defcioneshomicidio2020.pdf)

Ha sido reconocido por las organizaciones internacionales y nacionales que el crimen organizado ha permeado a las instituciones democráticas del Estado, desestabilizando su funcionamiento, atenuado por un gobierno que solo ha buscado polarizar a la sociedad, a quien se le debe exigir que actúe contra los delincuentes, mientras ha dejado a la ciudadanía en segundo término. Es un hecho, que nuestros días la libertad y los derechos fundamentales son solo para unos cuantos.

México se ha convertido en un país plagado de violencia, muy a pesar de que el gobierno niega y presenta cifras menores a la realidad, sumiso ante las organizaciones criminales, quienes además de intimidar a la sociedad, se disputan el control de diversas regiones de nuestro país.

No solo eso, actualmente contienden por el control de los productos básicos más elementales como lo es la carne, la tortilla y el pan, lo que ha generado presión en los precios de los productos, ciudadanos que no denuncian porque no queda clara la línea entre las autoridades policiales y el crimen organizado y quienes lo hacen, pagan con su vida.

Con una política que solo simula austeridad, se eliminaron los fondos destinados a la seguridad pública, no así, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, misma que aumento su presupuesto, con lo que se tenía considerado reforzar acciones de prevención, profesionalización e infraestructura, sin que hasta el momento exista un beneficio para la población. Las transferencias federales destinadas a la seguridad pública disminuyeron respecto del 2021. Lo que se busco fue militarizar al país, dejando abandonado el presupuesto para las policías civiles y municipales.

Con datos de la organización México Evalúa, encontramos que “mientras en 2014 los recursos manejados por fuerzas militares eran de 122 mmdp, similar a las administradas por instituciones civiles de seguridad, para 2022 aquellos recursos a cargo de militares serán de 204 mmdp, casi cuatro veces más que el presupuesto de fuerzas civiles”.

Señalan además que con la desaparición del Fortaseg para el ejercicio fiscal 2021 se “acabó por dismantelar las estrategias de fortalecimiento de la seguridad de los municipios más afectados por el crimen. Hasta 2020 dio recursos por 4.3 mmdp a 286 municipios, los cuales se destinaban a comprar patrullas, chalecos antibalas, uniformes, municiones, pagar controles de confianza de policía y equipamiento en general para las fuerzas de seguridad. Además, servían para la homologación policial, conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia”. Todos estos recortes han tenido sus efectos, mayor violencia y menor combate a la delincuencia organizada.

Exigimos a este gobierno a que garantice la seguridad en favor de los ciudadanos, quienes salen a trabajar por el sustento de su familia y que, por culpa de un régimen populista que no les brinda la protección que la Constitución le mandata, no tienen seguridad en sus calles, en sus comercios, en sus casas y familias. Hoy miles les lloran a sus seres queridos ausentes quienes han perdido la vida por la irresponsabilidad de toda esta administración federal. Una sociedad abandonada

que vive la desintegración social mientras los responsables se limitan a justificar el accionar del crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que de manera urgente se realice un cambio a la Estrategia Nacional de Seguridad por la creciente ola de violencia que vive nuestro país.

Segundo. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a destinar recursos extraordinarios para el Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de reforzar el combate a la inseguridad particularmente para los municipios de Ciudad Juárez y Urique por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de junio del 2022.



Daniela Soraya Álvarez Hernández

Diputada Federal